



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 173

Santiago de Cali, catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL:	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE INTERESES COLECTIVOS
DEMANDANTE:	CESAR AUGUSTO NARVAEZ OTALVARO
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE DAGUA
PROCESO:	76001-33-33-016-2018-00246-01
ASUNTO:	Remite expediente al H. Consejo de Estado para eventual de revisión, artículo 272 de la Ley 1437 de 2011

I. ASUNTO

El Despacho decide la petición formulada por la entidad accionada municipio de Dagua en el proceso de la referencia, para que se dé aplicación al mecanismo de eventual de revisión, dispuesto en el artículo 272 de la Ley 1437 de 2011¹.

II. ANTECEDENTES

La Sala de Decisión No 3 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 29 de julio de 2020 (Fls. 19-32), notificada a las partes el 30 del mismo mes y año (Fl. 33), dentro de la acción popular incoada por el señor Cesar Augusto Narváez Otálvaro contra el municipio de Dagua, entidad que el 11 de agosto de 2020 (Fls. 1-16) peticiona la aplicación del mecanismo de eventual de revisión consagrado en el artículo 272 de la Ley 1437 de 2011.

El artículo 273 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

"Artículo 273. Procedencia. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del Ministerio Público, contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos, que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los siguientes casos:

1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales.
2. Cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de esta Corporación."

¹ **FINALIDAD DE LA REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO.** La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica.

Con respecto a lo exigido en el numeral 1, el accionado señala que existe una contradicción o divergencia de interpretación de la Ley 2 de 1959, por lo siguiente:

El Corregimiento “El Queremal” del Municipio de Dagua, el cual se encuentra ubicado en la cordillera occidental, zona que está inmersa en la Ley 2 de 1959, que regula las siete (7) grandes reservas forestales “para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”, con carácter de Zonas forestales protectoras y bosques de interés general.

Que el artículo 1 de la Ley 2 de 1959, señala la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida por el Occidente, el Océano pacífico y Cordillera Occidental.

Que el Corregimiento de Dagua también se encuentra ubicado en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Que la citada Ley 2 de 1959, regula las áreas de reserva y de bosques, limita los usos del suelo para conservar del medio ambiente, corrientes de agua y asegurar la adecuada utilización, la cual el Gobierno Nacional reglamentará la utilización de los terrenos de propiedad privada que se encuentren localizados dentro de los límites de las zonas de reserva forestal o de Bosques Nacionales.

Que, en esa secuencia, la Ley 1450 de 2011, señalada en la sentencia de primera instancia, establece una Distribución de Competencias en materia del ordenamiento del territorio de la Nación y de las entidades territoriales, (art. 291) en una política general de ordenamiento del territorio en los asuntos del interés general: áreas de parques nacionales y áreas protegidas, aspecto en el cual, se destacó en la apelación la Ley 2 de 1959 y las áreas de reserva que son de interés general.

Ahora, respecto a que la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de esta Corporación, señala el municipio accionado que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle contradice lo dispuesto en la sentencia del 6 de julio de 2000, expediente No CE-SEC1-EXP2000-N5303, Edgar Julián Benavides, en donde se hizo un estudio sobre las plazas de mercado y se concluyó, que:

“Las plazas de mercado se han entendido como una especie de las plazas, previstas como bienes de uso público en los artículos 674 y 1005 del C.C., cuando son de propiedad del Estado, en especial de los municipios. De modo que el género es la plaza y la especie es la plaza de mercado, por consiguiente, una y otra están revestidas de las características de los bienes de uso público, a saber: Ser de dominio de una entidad estatal, usualmente, de los municipios, y de uso de todos los habitantes del respectivo territorio.

Además, se hallan cobijadas por los atributos propios de tales bienes, como son la inenajenabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, recogidos en los artículos 63 de la Carta y 674 del C.C.

A su vez, para que una plaza de mercado pueda considerarse como bien de uso público plaza de mercado, debe estar destinada a la realización de

actividades de expendio o venta de víveres o productos de primera necesidad, según se puede deducir de los artículos 1º y 2º del decreto 929 de 11 de mayo de 1.943, y la interpretación que de éstos ha hecho la Corte Constitucional, v.g. en sentencia T-238 de 1.993, citada en la vista fiscal.

De otro lado, la forma de institucionalización de un bien como de uso público depende de si es natural, como los ríos o las playas, o artificiales, precisamente, como las plazas de mercado, sobre todo cuando ellas se dan en recintos cerrados o edificios. En el evento de los artificiales, que es lo que interesa al caso, se tiene que para que adquieran la categoría de bien de uso público se requiere la afectación al uso público, la cual consiste en la manifestación de voluntad del Estado, a través de la autoridad competente, por medio de la cual se incorpora o destina al uso o goce de la comunidad.

Esta declaración de voluntad puede darse de manera formal, esto es, por medio de un acto jurídico, o de hechos o comportamientos que indiquen de manera inequívoca la decisión de consagrar el bien al uso público, como, por ejemplo, la inauguración de una obra (un puente, una calle, etc.) y darla como abierta al público

Así las cosas, para que un inmueble pueda ser considerado como plaza de mercado es necesario que reúna los siguientes requisitos o supuestos:

- Que sea del dominio o propiedad del municipio
- Que exista afectación del mismo al uso público, sea de manera formal o, de hecho, y
- Que el uso efectivo y real del bien inmueble sea la distribución o venta de productos de primera necesidad.

Los dos primeros son aspectos formales o jurídicos y el tercero de índole material o sustancial.”

En esas condiciones se identifica que una plaza de mercado con horario preestablecido y debidamente conformado con una asociación de campesinos en el corregimiento el Queremal está ubicado en el Parque Central- que es un dominio de propiedad el Municipio- que existe una afectación temporal de hecho en el cual se hace efectivo la distribución o venta de productos de primera necesidad, y, en ese orden de ideas, la orden de reubicar la plaza de mercado de los campesinos puede ser un acto contradictorio a la sentencia anteriormente mencionada.

De otro lado, que, en sentencia del 14 de octubre de 2010, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, radicación No. 50001-23-31-000-2005- 00055-01(AP) Actor: ORLANDO HERNANDEZ MORA Demandado: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, precisó:

“i) La actividad de las plazas es un servicio público, y, ii) Los bienes inmuebles en los cuales se presta el servicio de plaza de mercado son bienes de uso público”

Que en el corregimiento “El Queremal” Municipio de Dagua, la plaza de mercado de los campesinos fue en la misma zona antes de la construcción del Parque Central donde se realiza la venta de los productos de primera necesidad solo para los fines de semana (sábados y domingos)- actividad controlada por la Administración y la asociación “ASOMARQUE”, que constituye un aspecto cultural, es un servicio público que se realiza en dominio de ocupación de hecho de un bien de uso público, desde mucho

Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
 Accionante: Cesar Augusto Narváez Otálora y otros
 Accionado: Municipio de Dagua
 Radicado No 76001 33 33 016 2018 00246 01
 Auto de sustanciación

antes de ser el Parque Central. En cual se dan los postulados jurisprudenciales del Consejo de Estado- que pueden ser contrariados por las providencias objeto del mecanismo de revisión eventual- al no establecer estos criterios para la protección cultural de la plaza de mercado de la población.

De otro lado, conforme con lo establecido en el artículo 274 ibidem, i) la petición de aplicación del mecanismo eventual de revisión deberá ser formulada dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia o providencia que ponga fin al proceso y ii) corresponde al Tribunal Administrativo respectivo dentro de los ocho (8) días siguientes contados a partir de la radicación de la petición remitir el expediente con destino al Consejo de Estado.

III. CONSIDERACIONES

En el presente caso, se encuentra que la sentencia de segunda instancia dentro de la acción popular, quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2020, de tal forma que los ocho (8) días de que trata el artículo 274 del C.P.A.C.A., vencen el 14 del mismo mes y año; al presentarse la petición el 11 de agosto de 2020 (Fls. 1-16), se encuentra en tiempo.

Así mismo, que el municipio de Dagua expuso las razones por las que, según su criterio, se impone la revisión de las decisiones proferidas tanto por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali y por la Sala de Decisión No 3 de este Tribunal, porque presuntamente, contrarían jurisprudencia reiterada del H. Consejo de Estado y presenta contradicciones o divergencias interpretativas sobre el alcance de la ley 2 de 1959.

Por lo anterior, lo procedente es ordenar que por Secretaría se proceda a remitir el expediente del proceso de la referencia, con destino al H. Consejo de Estado, para los efectos previstos en el artículo 274 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo brevemente expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Remitir el expediente del proceso de la referencia con destino al Consejo de Estado, para los efectos previstos en el artículo 274 de la Ley 1437 de 2011, previas las anotaciones y registros de rigor.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a las partes y demás sujetos procesales a las siguientes direcciones electrónicas: Parte Accionante: Cesar Augusto Narváez Otálvaro, calle 9 No 8-25 Corregimiento del Queremal, Dagua, Teléfono 3182783653, E mail: cano230363@gmail.com Parte Accionada: Municipio de Dagua, Calle 10 No 9-30, Teléfono 8892482, E mail: alcalde@dagua-valle.gov.co Ministerio Público: procjudadm217@procuraduria.gov.co Defensoría del Pueblo: valle@defensoria.gov.co

Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
Accionante: Cesar Augusto Narváez Otálora y otros
Accionado: Municipio de Dagua
Radicado No 76001 33 33 016 2018 00246 01
Auto de sustanciación

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada